

## **Tema 12. Cuentas anuales: regulación legal, informe anual, auditoría.**

### **12.1. Introducción**

A fin de que la información contable cumpla su cometido, ha de reunir los requisitos que se han ido explicando en a lo largo de los temas anteriores. La confluencia de las características, principios y normas de valoración, permiten que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados, que es el objetivo final perseguido por la contabilidad.

Para ello, el empresario debe atender las normas contables contenidas en la legislación mercantil. Algunas de ellas hacen referencia exclusivamente a cuestiones formales, mientras que otras se ocupan de matizar puntos más sustanciales, como son: la valoración de los elementos patrimoniales, la verificación de los estados contables y el valor probatorio de los libros contables y otros documentos similares.

La adhesión de España, el 1 de enero de 1986, a la entonces Comunidad Económica Europea, supuso un cambio radical y un gran avance en esta materia, más en cuestiones de fondo que de forma, puesto que obligó a armonizar nuestra legislación mercantil a la europea, para adaptarse a lo dispuesto en las directivas comunitarias sobre derecho de sociedades. Con objeto de lograr la concordancia de la normativa española con la europea, a lo largo de estas últimas tres décadas han ido viendo la luz numerosas leyes que culminan con la aprobación de dos reales decretos en enero de este mismo año 2021 que actualizan el marco contable y de auditoría, adaptándolo a la normativa europea, para ayudar a mejorar la calidad de la información financiera y su supervisión, reforzando con ella la confianza de los inversores y la fortaleza de los mercados de capitales.

Se trata de dos Reales Decretos que aprueban, por un lado, el Real Decreto 1/2021 que modifica el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007) y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007) y, por otro lado, el Real Decreto 2/2021 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.

Toda vez que en el Tema 1 se ha estudiado la evolución de la normativa contable relativa a la reforma del PGC y el marco conceptual, en este capítulo se explicarán en primer lugar, las exigencias legales existentes en España relativas a los empresarios y la formulación de los libros contables para finalizar con la legislación actual en materia de auditoría contable.

## **12.2. Regulación y exigencias legales de los empresarios**

El Código de Comercio español modificado parcialmente por la Ley 19/1989 de 25 de julio y por la Ley 16/2007 de 4 de julio de 2007, regula la Contabilidad de los empresarios (artículos 25 y siguientes). En este apartado se resumen los principales aspectos de esta.

### **12.2.1. La Contabilidad legal en España**

El artículo 25 del Código de Comercio (en adelante C. de C.) obliga a todo empresario a llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad empresarial, pudiendo delegar en otras personas la realización de ésta, lo que no quita para que la responsabilidad la asuma él, salvo en supuestos particulares.

Los empresarios, obligatoriamente, deberán llevar el libro de inventarios y cuentas anuales y el libro Diario (art. 25 del C. de C.); el libro Mayor no es obligatorio, pero generalmente se sigue llevando. Los libros han de llevarse en forma escrita, pudiendo utilizar procedimientos mecanizados (en la actualidad se suele hacer de forma telemática), debiendo estar valoradas todas las partidas en euros. Las sociedades mercantiles llevarán además un libro o libros de actas, en los que constarán todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales.

Los libros (Libro Diario, de Inventarios y Cuentas Anuales) han de ser legitimados en el Registro Mercantil correspondiente; si la empresa cambiase de domicilio, seguiría siendo válida la legalización efectuada por el registro originario.

Los libros han de conservarse, junto con los documentos y justificantes, debidamente ordenados, durante seis años contados a partir del último asiento, obligación que perdura aun cuando cese la actividad empresarial, fallezca el empresario o se disuelva la sociedad (art. 30 del C. de C.).

En el libro Diario se registrarán cronológicamente todas las operaciones realizadas por la empresa, pudiendo efectuarse en él anotaciones que resuman operaciones realizadas en un plazo no superior al mes, cuyo detalle se registrará en otros libros.

El libro de inventarios y cuentas anuales se abrirá con el inventario de apertura; al menos, una vez al trimestre se efectuará el balance de comprobación de sumas y saldos y una vez al año el inventario y las cuentas anuales. La realización del inventario, cuyo resultado puede recogerse, junto con las cuentas anuales, en un mismo libro o bien en otro individualizado, comparará la información ofrecida por la contabilidad y la verdadera situación económica de la empresa, comprobada mediante el recuento físico y la valoración de cada uno de los elementos contabilizados.

A excepción de las cuentas anuales, los registros contables serán secretos, salvo en ciertos casos previstos legalmente o cuando el empresario lo juzgue conveniente.

Finalmente, hay que señalar que indicar que existen otros libros de carácter auxiliar, obligatorios desde la perspectiva fiscal, concretamente para el Impuesto de Sociedades y para el IVA, como son los libros de compras, ventas y rendimientos, cobros y pagos y gastos, registros de facturas emitidas y recibidas y de bienes de inversión, aunque no son propiamente contables.

### **12.2.2. Exigencias legales a los empresarios relativas a las Cuentas Anuales**

- *Formulación*

La obligación de formular las cuentas anuales reside en los empresarios individuales y los administradores de las sociedades. Para ello, cuentan con un plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio y, junto a ellas, han de formularse también el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. En caso de cuentas consolidadas, habrá que adjuntar también las cuentas anuales e informe de gestión consolidadas.

Las cuentas deben estar redactadas de forma clara y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. Asimismo, las cuentas anuales deberán ser expresadas en euros.

Las cuentas deben estar firmadas por el empresario individual o, en el caso de sociedades, por:

- Todos los socios ilimitadamente responsables en el caso de sociedades colectivas o comanditarias.
- Todos los administradores de la sociedad.

Si faltara la firma de alguna de las personas, se señalará en el propio documento con expresa mención de la causa.

- *Verificación y Aprobación*

Las cuentas anuales de sociedades que no presenten Balance y Memoria abreviadas deben someterse a revisión por un auditor independiente. Será la Junta General de Accionistas los encargados de designar a los auditores de cuentas de la sociedad y no podrá revocarse el contrato con ellos antes de que finalice el período por el fueron contratados salvo que exista causa justa.

Los auditores comprobarán si las cuentas anuales en su conjunto ofrecen la imagen fiel *del patrimonio, situación financiera y resultados y redactarán un informe detallado* sobre el resultado de su trabajo (en el siguiente apartado de este tema, se profundizará en la normativa relativa a la auditoría de cuentas).

Finalmente, las cuentas anuales se deben aprobar en Junta General ordinaria de accionistas, dentro de los siguientes seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio. Deben aprobar las cuentas y la distribución de resultado (conforme al RD legislativo 1/2010 de 2 de julio y la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -ICAC- de 5 de marzo de 2019).

La Junta también debe aprobar la aplicación del Resultado del ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el RD legislativo 1/2010 de 2 de julio y la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019.

- *Depósito y Publicidad*

En el mes siguiente a la aprobación de las Cuentas Anuales, éstas se deben depositar en el Registro Mercantil. Concretamente, se debe presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud firmada de quién presente las Cuentas a depósito.
2. Certificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales y Aplicación del Resultado, emitido por el órgano competente.
3. Un ejemplar de las Cuentas Anuales.
4. Un ejemplar del Informe de Gestión (cuando corresponda).
5. Un ejemplar del Informe de Auditoría (cuando corresponda).
6. Certificación acreditativa de que las cuentas depositadas se corresponden con las cuentas auditadas.

Los Registradores Mercantiles deben remitir al Registro Central, el primer día hábil de cada mes, una relación de las empresas que hubieran depositado sus cuentas en el mes precedente. Así, el Boletín Oficial del Registro Mercantil podrá publicar el anuncio de las sociedades que han cumplido con las obligaciones de depósito.

En el caso de la publicación deberá indicarse si la información es íntegra o abreviada. Si es íntegra, debe reproducirse fielmente todo el texto de los documentos depositados, incluyendo el informe de los auditores. Si por el contrario la información es abreviada, se debe hacer referencia a la oficina del Registro Mercantil en los que hubiesen sido depositados todos los documentos. De una forma u otra, cualquier persona puede solicitar y obtener la información de todos los documentos depositados.

- *Régimen sancionador*

El incumplimiento por parte de los administradores de la obligación de depósito de las cuentas anuales, y resto de documentación obligatoria, en el Registro Mercantil, dará lugar a una sanción a la sociedad que puede oscilar entre los 1.200€ y 60.000€ dependiendo en función de la dimensión de la sociedad.

### **12.3. La Auditoría de Cuentas**

La auditoría de cuentas se configura en nuestra legislación como la actividad que, mediante la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión

de un informe acerca de la fiabilidad de los documentos contables auditados; no limitándose, pues, a la mera comprobación de que los saldos que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los que aparecen en el conjunto de estados financieros que conforman las cuentas anuales.

La auditoría de cuentas es un servicio que se presta a la empresa que se audita y que afecta e interesa no sólo a la propia empresa, sino también a terceros que mantengan relaciones con la misma, habida cuenta que todos ellos, empresa y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico-contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas. Por tanto, la actividad de auditoría de cuentas se caracteriza por la relevancia pública que desempeña. Estas consideraciones han tenido su reflejo legal.

#### **12.3.1. Evolución normativa**

A nivel europeo, las Directivas Comunitarias se han ocupado de estas mismas cuestiones, bien a través de aquellas Directivas que afectan a las empresas, bien a través de la denominada VIII Directiva del Consejo (2006/43/CE), referida específicamente al ejercicio de la auditoría de cuentas, que recientemente ha sido modificada por la Directiva 2014/56/UE.

En el primer caso, se establecen normas para las empresas en todo lo referente a elaboración, revisión y publicación de sus cuentas, bien sean éstas individuales o se refieran a un grupo de empresas que las represente de manera consolidada. En el segundo caso, la VIII Directiva del Consejo (2006/43/CE) regula, entre otros, aspectos tales como el acceso a la condición de auditor de cuentas o a las normas relativas a la integridad y a la independencia del auditor, su ámbito de aplicación, y éste comprende tanto lo referente a las personas, físicas o jurídicas, que se habilitan para el ejercicio de la auditoría de cuentas, como las empresas o grupos de éstas que tienen la obligación de auditarse.

En España, la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, reguló por primera vez la auditoría de cuentas en España. En ella se definió la actividad de auditoría y se establecieron las condiciones que se deben cumplir para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), las normas que regulan su ejercicio, el contenido mínimo del informe de auditoría de cuentas anuales, el régimen de incompatibilidades

y de responsabilidad de los auditores de cuentas, el régimen de infracciones y sanciones y la atribución al ICAC del control de la actividad y de la potestad disciplinaria de los auditores de cuentas. A lo largo del tiempo, se han publicado diversas normas que han ido completando este régimen. Hay que destacar la reforma sustancial de la Ley 44/2002 (que abordó aspectos como establecer examen unificado de acceso al ROAC, obligación de seguir cursos de formación continuada, modificaciones sustanciales sobre el deber de independencia y causas de incompatibilidades, deber de rotación, responsabilidad civil, custodia y acceso a la documentación, régimen de infracciones y sanciones etc). Otras modificaciones posteriores tuvieron lugar con la Ley 16/2003 (composición y función de los órganos rectores del ICAC) y la Ley 16/2007 (sobre los plazos de contratación de los auditores y la posibilidad de renovación del contrato por periodos sucesivos de hasta 3 años).

La segunda de las reformas sustanciales de la Ley de Auditoría tuvo lugar con el objeto principal de adaptar la legislación española a la anteriormente citada Directiva 2006/43/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. Concretamente, la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Esta nueva regulación se configuraba sobre la base de entender que la actividad de auditoría desempeña una función de interés público, entendida ésta por la existencia de un conjunto amplio de personas e instituciones que confían en la actuación del auditor de cuentas, por cuanto que su correcta y adecuada ejecución constituyen factores que contribuyen al correcto funcionamiento de los mercados al incrementar la integridad y la eficacia de los estados financieros en cuanto vehículos de transmisión de información.

Entre las modificaciones que introdujo la mencionada Ley de 2010, cabe resaltar las relativas al contenido mínimo del informe de auditoría; la asunción de la responsabilidad plena del auditor de cuentas en la auditoría de las cuentas anuales consolidadas; las fuentes jurídicas a las que debe sujetarse la actividad de auditoría (normas de auditoría, normas de ética y normas de control de calidad interno de los auditores y sociedades de auditoría), incorporando como normas de auditoría las Normas Internacionales de Auditoría que sean adoptadas por la Unión Europea; la autorización e inscripción en el ROAC de los auditores autorizados en otro Estado miembro de la UE; la incorporación del concepto de red a los efectos de observar el deber de independencia; así como la incorporación del concepto de entidades de interés

público (EIP) que introdujo, asimismo, la obligación de publicar un informe anual de transparencia y la obligación de rotación del auditor firmante del informe, además de la obligación para estas entidades de contar con una Comisión de Auditoría. En cuanto al Control y Supervisión de la actividad de la auditoría de cuentas se delimita su alcance y finalidad.

Posteriormente se publicó el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) que pretende ofrecer un texto sistemático y unificado, comprensivo de la normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuentas, regularizando, armonizando y aclarando los textos refundidos.

A continuación, se publicó el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC RD 1517/2011). Este Real Decreto dicta las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta Ley.

Finalmente, en los años 2014 y 2015 se inicia la nueva y última reforma hasta la fecha actual que culmina con la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC) que deroga el TRLAC. El proceso finaliza con la aprobación, en este mismo año 2021, del Real Decreto 2/2021 de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.

#### **12.2.2. Marco normativo actual -Ley 22/2015-**

La reciente modificación del marco legal de la auditoría tiene como objetivo principal completar la normativa derivada de las reformas normativas en el ámbito de la Unión Europea adoptadas como consecuencia de la anterior crisis financiera, integradas por la Directiva 2014/56. Estas normas tuvieron su transposición en España a través de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que estaba pendiente del necesario desarrollo reglamentario, al que se da cumplimiento con el RD 2/2021. Este Reglamento proporciona más claridad y seguridad en la interpretación y ejecución de las disposiciones de la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015.

Para llevar a cabo el fortalecimiento de la independencia de los auditores se establecen los mecanismos para evitar conflictos de intereses, así como los requisitos necesarios



de documentación en los papeles de trabajo del encargo del análisis de las amenazas a la independencia, así como las posibles medidas de salvaguarda adoptadas. Esa documentación está sujeta a la supervisión pública para garantizar el cumplimiento de las exigencias legales. También se establece el detalle de las reglas de cómputo para determinar los límites a la dependencia económica por alcanzarse un determinado nivel de concentración de honorarios.

En cuanto a la transparencia sobre el trabajo de los auditores, la normativa establece un conjunto de requisitos de publicidad, entre los que destacan la obligación de emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público y la obligación de publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo a esos auditores por parte del ICAC.

El objetivo fundamental de este nuevo marco mejorar la calidad de las auditorías, aumentando la confianza en esta actividad y la credibilidad del informe de auditoría, reforzar la transparencia en la actuación de los auditores, su independencia y la mejora de la calidad, así como impulsar una supervisión pública uniforme en todo el conjunto de la Unión Europea.

Esta Ley se estructura en un Título Preliminar y cinco títulos, en los que se contienen ochenta y nueve artículos, diez disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y catorce disposiciones finales.

La nueva normativa incorpora disposiciones para recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la calidad de las auditorías.

La norma regula el régimen de acceso, así como el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuyo contenido público incorpora el mandato europeo de publicidad de las sanciones. Adicionalmente, establece la inscripción obligatoria, en el Registro Oficial citado, de aquellos auditores de cuentas y sociedades de auditoría que emitan informes de auditoría en relación con las cuentas anuales o consolidadas de ciertas sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea, cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de requisitos equivalentes a los que se exige a los auditores de cuentas nacionales.

Se incorpora, la obligación de escepticismo profesional, así como la aplicación del juicio profesional, que deben presidir la realización de cualquier trabajo de auditoría desde su planificación hasta la emisión del informe. Destacamos entre el contenido más relevante:

- Normas de auditoría. Se siguen manteniendo las normas internacionales de auditoría que sean adoptadas por la Comisión de la Unión Europea. Se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a los contemplados en normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea.
- Mayor contenido del informe de auditoría. Para todos los auditores se establece un mayor contenido del informe de auditoría. En el caso de auditoría de entidades de interés público se les exige como novedad un informe adicional (art. 36 de la Ley) que debe entregarse a la comisión de auditoría. En él se deben explicar cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoría, al objeto de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.
- Duración de los contratos. Se limita su duración a diez años. Así se opta por ejercer determinadas opciones más restrictivas, consistentes que pretenden asegurar una aplicación consistente y uniforme de las normas de independencia, pilar fundamental en que descansa la confianza que se deposita en el informe de auditoría. El art. 40 que regula la contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría, señala que el período total de contratación, incluidas las prórrogas, no excederá de la duración máxima de diez años, no obstante, transcurrido este plazo y, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor y se realice una auditoría conjunta. En cuanto a la rotación la norma establece que, una vez transcurridos cinco años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación de los auditores principales responsables del trabajo de auditoría, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres años para que dichas personas puedan volver a participar en la auditoría de la entidad auditada.
- Limitación de los honorarios de los auditores. En relación con las normas de limitación de honorarios por dependencia financiera, se impone el requisito más restrictivo de prohibir la realización de auditoría en el ejercicio siguiente, toda vez que alcanzar determinado porcentaje de concentración, supone una amenaza de interés propio e incluso de intimidación que no puede mitigarse (art. 41). En

relación con las limitaciones de honorarios se exige que el auditor considere adicionalmente la red en que opera al objeto de evitar que mediante ésta se eluda su cumplimiento.

- Independencia de los auditores y régimen de incompatibilidades. Se recogen diversas causas de incompatibilidad subjetivas, y servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea Entidad de Interés Público, su matriz y sus dependientes (art. 16). Se modifican determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para realizar la auditoría, incorporando los relacionados con operaciones realizadas con los instrumentos financieros, la tenencia de intereses significativos y la aceptación de obsequios de valor significativo.

Mantiene el período de cómputo temporal de determinadas situaciones de incompatibilidad al ejercicio anterior al que se refieren los estados financieros auditados, reduciéndolo a un año para la gran mayoría, que coinciden con los servicios que se prohíben para los auditores de entidades de interés público. Destacan, entre otros, los servicios de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía, salvo que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, o de diseño de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera.

Determinados familiares del auditor tampoco pueden prestar esos servicios incompatibles a la entidad auditada. Por ejemplo, el cónyuge del auditor no puede llevar la contabilidad de la auditada.

- Requisitos más estrictos para los auditores de entidades de interés público. El Capítulo IV contiene los requisitos más estrictos exigidos a los auditores de entidades de interés público. En primer lugar, debe emitirse un informe de auditoría cuyo contenido es mucho más amplio que el previsto con carácter general, en segundo lugar, estos auditores deben publicar el informe anual de transparencia, y los de la red auditora. Además, se exige que se publique de forma separada al de la red a la que pudiera pertenecer en aras de alcanzar una mayor transparencia y evitar cualquier confusión, sin perjuicio del contenido que adicionalmente podrá desarrollarse mediante resolución del ICAC.

- Régimen de supervisión pública. Se regula el sistema de supervisión pública con plena responsabilidad del ICAC, autoridad responsable en materia de auditoría de cuentas, delimitando este ámbito por las funciones que se atribuyen y los sujetos a los que alcanza.
- Régimen sancionador. Se introducen ciertas modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones. Dichas modificaciones se refieren básicamente a: inclusión de nuevos tipos infractores; introducción de algunas modificaciones en la clasificación de los tipos infractores; modificación de las normas de publicidad de las sanciones y de denuncia.
- Tasas del ICAC. Destaca la creación de la tasa por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
- Comisión de Auditoría. En las disposiciones adicionales, destaca la novedad incorporada en la disposición adicional tercera, que regula la exigencia de una Comisión de Auditoría para las entidades de interés público, de acuerdo con los requisitos, excepciones, dispensas, composiciones y funciones que contiene la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, e incorporando su contenido en el articulado del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

### **12.2.3. Los informes de auditoría: tipos de opinión.**

El Informe de Auditoría es el documento final del trabajo de auditoría que contiene la opinión del auditor sobre la fidelidad y exactitud de las cuentas examinadas, en su conjunto. Normalmente va dirigido a los accionistas y a los miembros del consejo de administración si son las cuentas anuales, o a quien le haya hecho el encargo si se trata de una auditoría específica, por ejemplo, antes de llevar a cabo una adquisición. Una auditoría supone una revisión oficial de los estados contables de una institución para comprobar la exactitud de los apuntes contables y los criterios utilizados al realizarlos. Tiene como fin asegurar que se han registrado todas las transacciones económicas y que los estados financieros reflejan lo más fidedignamente posible la verdadera situación patrimonial y económica de la entidad y se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría puede ser limitada o

completa, según su alcance, y externa o interna, según la realice la propia empresa u otra firma.

Como ya hemos indicado, el informe incluirá una opinión técnica para manifestar de forma clara y precisa si las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de acuerdo con el marco de información financiera aplicado en la elaboración de las cuentas y que los tipos de opinión podrán ser:

- a) Opinión favorable o no modificada;
- b) Opinión modificada:
  - Con salvedades;
  - Desfavorable;
  - Denegada;

- *Opinión Favorable*

El auditor expresará una opinión favorable (o no modificada) cuando concluya que los estados financieros expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, así como de los resultados y, en su caso, de los flujos de efectivo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

- *Opinión Modificada.*

El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando: concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida; los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.

**a) Con salvedades.** El auditor expresará una opinión con salvedades cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que:

- a. las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros o;

- b. No pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión (lo que se conoce como **limitación al alcance** del trabajo de auditoría), pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados.

**b) Opinión desfavorable.** El auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones (incluyendo defectos de presentación o desglose de la información), individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas sobre los estados financieros. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor:

- no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros.
- en el caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros, éstos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros.
- en relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros.

**c) Opinión denegada.** El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. Asimismo, el auditor denegará la opinión cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de **múltiples incertidumbres** el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros.

La emisión de una opinión denegada en los supuestos en los que existan múltiples incertidumbres es un aspecto de juicio profesional. No obstante, entendemos que en los casos en los que concurren las dos circunstancias mencionadas, es decir, existencia de múltiples incertidumbres y/o que el efecto conjunto de las mismas en las cuentas

anuales se califique de material y generalizado en las cuentas anuales, sería generalmente recomendable la emisión de una opinión denegada.

## **REFERENCIAS**

PGC con las modificaciones del 2021:

<https://www.icac.gob.es/contabilidad/normativas/nacionales#portada>

Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/12/2>

José Rivero (2021). Contabilidad Financiera -adaptado al RD 1/2021 de 12 de enero-. EDISOFER.